

¿Es posible la moratoria en América Latina?

Arthur MacEwan*

¿Por qué los gobiernos de las naciones deudoras siguen en general cumpliendo sus compromisos de pago con los bancos? ¿Por qué los pueblos de esas naciones aceptan los programas de austeridad que se les imponen con el fin de que pueda pagarse la deuda?

La crisis del endeudamiento ha tenido un costo horrendo para los países deudores, sobre todo en América Latina. Si bien no a todos los países latinoamericanos les ha ido igualmente mal, de 1980 a 1985 el ingreso per cápita de la región disminuyó en alrededor de 9%. A medida que la desocupación se eleva y los gobiernos reducen el gasto social, los ingresos de los pobres disminuyen desproporcionadamente. En México, por ejemplo, la capacidad adquisitiva del salario mínimo bajó 30% de 1981 a 1984. En Brasil no fue tan extremosa la caída de los salarios reales: en ese mismo período equivalió a 17 por ciento.

Sin embargo, los salarios en disminución no han significado buenos tiempos para las empresas. En los años recientes, Brasil y México, por ejemplo, han transferido más de 5% del ingreso nacional a los acreedores extranjeros. Los costos de tan enorme sangría no pueden confinarse a los segmentos más bajos de la sociedad.

Hasta ahora, los gobiernos de los países capitalistas latinoamericanos no han podido ofrecer nada distinto de la austeridad y han intentado resolver sus problemas económicos con medidas relativamente ortodoxas. En general, han intentado conformar programas que les permitan pagar la deuda. Todos profesan el credo del crecimiento económico y la mejoría de los niveles de vida; no obstante, a juzgar por sus acciones, parecería que todos aceptan subordinar las preocupaciones internas al pago re-

gular de la deuda. Ha habido una gran cantidad de retórica y algunas acciones limitadas que ponen en duda la necesidad absoluta de rembolsar lo que se debe. Bolivia interrumpió sus pagos en 1985 y desde entonces ha estado en suspensión *de facto*, si no *de jure*. Perú también ha limitado fuertemente sus desembolsos. Incluso algunos de los deudores mayores han incurrido en retrasos por breve tiempo. Estas acciones, sin embargo, se han presentado como respuestas limitadas y temporales a las condiciones de emergencia. Quizá sea Bolivia una excepción, ya que en ese país, de por sí el más pobre de la América española, de 1980 a 1984 hubo una caída del ingreso de 27% que dejó a la economía en condiciones caóticas e hizo virtualmente imposible el pago de la deuda.

Austeridad heterodoxa

Muchos pondrían en entredicho la idea general de que los gobiernos latinoamericanos han utilizado medios ortodoxos para enfrentarse a sus problemas. Las actuales políticas de Argentina y Brasil, sobre todo, se presentan como nuevas posibilidades para América Latina, y a menudo se refieren a ellas los economistas considerándolas "programas heterodoxos". En ambos casos, un gobierno que surgió de un proceso electoral, tras muchos años de régimen militar, implantó un programa que se aparta de la clase de ortodoxia que por lo común impone el Fondo Monetario Internacional.

Resulta importante la diferencia entre la ortodoxia del FMI y la nueva "heterodoxia". No obstante, ambas concepciones tienen en común el compromiso fundamental de pagar la deuda. Ambas son ortodoxas en tanto definen el problema como el de encontrar una manera de rembolsar la deuda y a la vez resolver las dificultades económicas internas. Pagar la deuda significa continuar la transferencia de una vasta suma de recursos a manos de los banqueros de Estados Unidos, Europa y Japón. De una forma u otra, esto necesariamente significa austeridad.

Los programas "heterodoxos" que se adoptaron en Argentina, en 1985, y en Brasil, en 1986, estaban dominados por la preocupación con respecto a la inflación. En Argentina se habían elevado los precios 164, 344 y 627 por ciento durante cada uno de los tres años que precedieron a la aplicación del programa. En Brasil, en los tres años anteriores a la adopción de las medidas

* Profesor de economía de la Universidad de Massachusetts, en Boston. El autor, quien colabora con frecuencia en *Monthly Review: An Independent Socialist Magazine*, examina y comenta en este ensayo el libro de Anatole Kaletsky, *The Costs of Default*, The Twentieth Century Fund, Nueva York, 1985. El trabajo apareció en dicha publicación neoyorquina con el título de "Latin America: Why Not Default?", en el vol. 38, núm. 4, de septiembre de 1986, pp. 1-13, y se recoge en este espacio con la autorización de la Monthly Review Foundation. Los derechos pertenecen a Monthly Review Inc. Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán.

hubo alzas de precios de 211, 224 y 235 por ciento, respectivamente. Se consideró la inflación tanto el síntoma principal como la causa de la inestabilidad económica. Tras las nuevas políticas estaba la idea básica de que las economías comenzarían a crecer si se controlaba la inflación.

El rasgo común más notable de estos programas es la reforma monetaria, que entraña sustituir las viejas monedas por nuevos signos: el austral en vez del peso, en Argentina, y el cruzado en vez del cruzeiro, en Brasil. Las reformas se concibieron como acciones dramáticas que permitirían a los gobiernos disminuir enormemente la tasa de crecimiento de su respectiva oferta monetaria. Los dos programas también incluyeron medidas para reducir el gasto público, de manera tal que disminuyese el déficit del Gobierno.

Estos programas se apartan de la ortodoxia del FMI porque imponen controles de salarios y precios. Estas medidas suponen la intervención directa del Estado en la economía, en rechazo de la idea de confiar en la acción de mercados libres por completo de trabas. Además, junto con los controles de salarios y precios existe el compromiso, cuando menos retórico, de limitar los efectos de las medidas de austeridad en los pobres. En Brasil, por ejemplo, se incluyó la promesa de que el Gobierno garantizaría el abastecimiento de los alimentos básicos.

Los programas de Argentina y Brasil sí representan un cambio en América Latina, un alejamiento de la confianza en el mercado libre y la ideología del monetarismo para aceptar el papel intervencionista del Gobierno y el resurgimiento de la ideología desarrollista. El desarrollismo rechaza la concepción monetarista de "quien se quede atrás, que pague el pato", que comparte el FMI, debido a su carácter tan destructivo. La devastación causada por las políticas monetaristas, por ejemplo en Chile y Argentina durante los setenta, significó quiebras generalizadas y provocó la amenaza de graves conflictos sociales. El monetarismo, que en la actualidad parece estar a la defensiva en gran parte de América Latina, nunca fue aceptado en Brasil, ni siquiera por los gobiernos militares.

La pugna entre el monetarismo y el desarrollismo en América Latina es paralela a la lucha entre el monetarismo y el keynesianismo en Estados Unidos. Estas corrientes de pensamiento conciben de manera muy diferente, tanto en el ámbito práctico como en el de la ideología, cómo deben manejarse las economías capitalistas. Ninguna, sin embargo, pone en duda los principios esenciales del capitalismo; esto significa, en América Latina, que ninguna cuestiona el compromiso básico de pagar la deuda.

En las primeras etapas de su aplicación, los programas de Argentina y Brasil tuvieron, al parecer, éxitos parciales. Ambos han disminuido enormemente la tasa inflacionaria. Sin embargo, cuando menos en Argentina, la baja de la inflación no se ha traducido en un crecimiento venturoso; el ingreso nacional siguió disminuyendo durante 1985 y en el curso de 1986. (Aún no es posible determinar el efecto del nuevo programa en el crecimiento económico brasileño.)

La "heterodoxia" de ambos programas no parece superar la ortodoxia tradicional en lo referente a los salarios. Aún no existen datos confiables, pero según el *Latin American Weekly Report* del 11 de abril de 1986, hay una fuente en la que se afirma que en Argentina los salarios disminuyeron 20% durante el pri-

mer año del Plan Austral. De acuerdo con un pronóstico de las consecuencias del programa brasileño, del cual se informó en la misma publicación, en el número correspondiente al 14 de marzo de 1986, los trabajadores de ese país podían esperar una baja inicial de 12% en sus salarios reales.

No obstante, es posible sin duda concebir otras posibilidades reales, aun dentro del marco social y político que prevalece en la mayor parte de la región. Vistas las cosas superficialmente, la posibilidad de suspender los pagos parece en extremo atractiva. En Argentina, Brasil y México, el servicio anual de la deuda requiere en cada caso más de 10 000 millones de dólares, si bien estas cifras están sujetas a un proceso continuo de renegociación y cambios. La suspensión liberaría enormes cantidades de fondos que se podrían utilizar para aumentar las importaciones que tanto se necesitan y para aportar una base para el crecimiento. Resalta la cuantía de los fondos destinados en la actualidad al servicio de la deuda si se comparan esas corrientes con las importaciones de mercancías de dichos países, las cuales habían caído en 1984 a 4 200 millones, 13 900 millones y 10 300 millones de dólares, respectivamente.

Las naciones deudoras han suspendido sus pagos antes. La crisis de los treinta provocó moratorias en toda América Latina. Durante la crisis actual, el Gobierno cubano, lo mismo que numerosos nacionalistas, tanto de la izquierda como de otras corrientes políticas, han abogado por la interrupción de pagos. ¿Por qué rechazan los gobiernos de América Latina tal acción?

Los costos de la moratoria

Se considera en ocasiones que dejar de pagar la deuda no es un camino razonable debido a que los acreedores pueden —según se dice— imponer a los morosos sanciones extremadamente costosas. En su interesante obra, Anatole Kaletsky sostiene de manera convincente que las sanciones no constituyen un disuasivo de la moratoria. Kaletsky, corresponsal del *Financial Times* de Londres, señala en primer lugar que si ocurriese una suspensión de pagos, los bancos lograrían muy pocos resultados mediante procesos judiciales, incluso en el mejor de los casos. El Chase Manhattan no puede embargar a Brasil como si fuera una casa de ahorros y préstamos pueblerina que se apodera del automóvil de un deudor incumplido. Pese a que la mayoría de los préstamos internacionales se contratan conforme a las leyes de Estados Unidos o de Inglaterra, los tribunales pueden hacer muy poco en favor de un banco que demande a un deudor soberano que haya incurrido en mora. En los últimos decenios se ha modificado, si bien sólo hasta cierto punto, la doctrina de la inmunidad por soberanía, conforme a la cual no es posible demandar a los gobiernos ni siquiera a causa de sus actividades comerciales. En algunos casos importantes, los tribunales han decidido que enjuiciar los actos de un Estado extranjero significaría usurpar funciones de la política exterior, las cuales no corresponden al Poder Judicial. Por lo menos en una ocasión, incluso tratándose de un deudor privado de otro país, el tribunal determinó que la moratoria era resultado de las acciones de un soberano extranjero y rehusó fallar en favor de los acreedores.

A mayor abundamiento, los activos de las empresas paraestatales están protegidos por los estatutos jurídicos respectivos, de manera que esas entidades no tienen que responder por las deudas de sus gobiernos. A guisa de ejemplo, las embarcaciones de

una compañía naviera que esté sujeta al control pleno de un Gobierno deudor, y que tenga existencia jurídica propia, no pueden embargarse para responder a las obligaciones de ese Gobierno con los bancos extranjeros. Igualmente, un país que incurra en mora puede arreglar las cosas de suerte que sus exportaciones sean propiedad del comprador antes de que salgan de sus fronteras. Kaletsky da el ejemplo de las exportaciones mexicanas de petróleo, que se vuelven propiedad del comprador extranjero en el momento mismo en que entran al buque cisterna del cliente.

La doctrina jurídica referente a estos asuntos se modifica constantemente y algunos de los fallos de los tribunales están sujetos a impugnaciones y revisiones. No obstante, no hay razón alguna para creer que las acciones jurídicas que puedan emprender los acreedores sean suficientes para disuadir a los gobiernos a suspender los pagos.

Kaletsky también descarta la idea de que las sanciones comerciales impuestas por el sector privado (los bancos en alianza con otras grandes empresas) sean un disuasivo eficaz de la moratoria. La suspensión de pagos no significaría la anulación de todas las relaciones financieras y comerciales y es muy poco probable que las empresas extranjeras que no resulten directamente perjudicadas por la suspensión se unan a las que emprendan acciones en contra de los gobiernos que hayan dejado de pagar a los bancos. En el pasado, los casos de suspensiones, e incluso de nacionalizaciones, no han provocado sanciones comerciales privadas eficaces. A este respecto, Kaletsky subraya lo siguiente: "Los gerentes de empresas transnacionales señalan que los banqueros rara vez se niegan a hacer negocios con países que han expropiado empresas industriales, petroleras o mineras, como ocurrió, por ejemplo, en Libia, en el Medio Oriente, en Perú e incluso en Cuba."

De hecho, si la suspensión de pagos permitiera que se creara una base para la expansión económica de América Latina, muchas empresas transnacionales le darían probablemente la bienvenida, a pesar de sus declaraciones públicas en contra de la medida. El crecimiento traería consigo la ampliación del mercado, la cual, después de todo, ha sido el principal atractivo para las transnacionales que trabajan en esa parte del mundo. Aun los bancos mismos estarían renuentes a abandonar sus lucrativas operaciones internas en Brasil sólo porque el Gobierno de ese país dejara de pagar sus préstamos internacionales. Según un ejemplo que proporciona Kaletsky, a principios de los ochenta el City Corp obtenía más de 20% de sus utilidades mundiales en Brasil, con un rendimiento neto sobre sus activos cinco veces mayor que el que lograba en Estados Unidos.

Existe el peligro de que la moratoria imposibilite a un país para obtener nuevos préstamos; la razón estribaría no en ciertas sanciones concertadas, sino simplemente en que se le consideraría un mal riesgo en los mercados internacionales de capital. El fantasma de perder el acceso a esos mercados pudo haber inhibido a los morosos antes de 1982. Sin embargo, difícilmente es una amenaza creíble en la actualidad. En una proporción muy grande, las naciones latinoamericanas deudoras ya han sido separadas de los mercados de capital. En los últimos años, los nuevos préstamos se han conseguido para financiar el pago de los créditos previamente otorgados y de hecho no ha habido incremento neto alguno de los fondos provistos.

El problema potencialmente más grave al que se enfrentarían

las naciones que dejaran de pagar no correspondería al campo de la acción privada, jurídica o no, concertada activamente o sólo realizada mediante la ciega operación del mercado. El asunto real, tal como subraya Kaletsky, es cuál sería la reacción de los gobiernos acreedores, sobre todo el de Estados Unidos. Por supuesto, hay muchas medidas que el Gobierno estadounidense y otros podrían adoptar, desde las restricciones comerciales hasta la intervención militar en las naciones morosas. Sin embargo, hay pocas razones para creer que se aplicarían tales medidas.

En la era de Reagan es posible admitir que Kaletsky se muestra demasiado optimista cuando afirma que "en la actualidad es impensable el uso de las armas en contra de un deudor remiso". Sin embargo, es difícil imaginar que incluso los halcones que dominan hoy la política en Washington intentasen invadir Argentina, Brasil o México como consecuencia de una suspensión de pagos de esos países.

En caso de una moratoria, es probable que por lo menos hubiese un pequeño escándalo en el Congreso de Estados Unidos en demanda de algunas acciones punitivas, restricciones comerciales o disminuciones de ayuda, por ejemplo. No obstante, es improbable que los responsables de la política exterior consideraran que la aplicación de sanciones habría de servir a los "intereses nacionales" de ese país. Quizá el Gobierno estadounidense creyese que su tarea principal fuera la de contener la moratoria o la de impedir que ésta alterara el sistema financiero internacional y amenazara otros intereses económicos, tales como los de las empresas transnacionales que trabajan en la industria de la nación que no hubiese pagado. Un conflicto político creciente basado en la aplicación de sanciones no parece el mejor procedimiento para lograr esos propósitos. La historia moderna apoya sin duda este punto de vista. Durante los últimos 50 años, desde que terminó la era de la "diplomacia del dólar", los gobiernos de los países capitalistas avanzados casi nunca han emprendido acciones para responder a las moratorias de las naciones deudoras.

Kaletsky concluye que está en el interés de los gobiernos de las naciones deudoras suspender el pago de la deuda. Aún más, este autor sostiene que los responsables de la política en dichos países llegarán quizá a la misma conclusión, por lo que "una moratoria... parece muy probable en el futuro previsible".

¿A qué obedece la renuencia a suspender los pagos?

El libro de Kaletsky ha estado ya un tiempo en circulación. Si bien es posible ampliar "el futuro previsible" un buen trecho, lo cierto es que hasta ahora no ha habido verdaderas suspensiones de pagos. ¿Por qué?

Incluso si mañana se declarase una moratoria —y, por supuesto, algo semejante podría ocurrir en cualquier momento—, aun sería necesario explicar por qué los gobiernos de los países deudores se han resistido tanto a suspender los pagos. Las argumentaciones de Kaletsky y la historia de los años treinta y de épocas anteriores nos conducirían a creer que esas moratorias ya se deberían haber producido en la actualidad.

Hay tres explicaciones que se refuerzan mutuamente, de por qué los gobiernos latinoamericanos se han negado a suspender el pago de la deuda, de por qué han intentado enfrentarse a la

crisis del endeudamiento utilizando medios relativamente ortodoxos.

La primera de ellas se refiere a las características particulares, de la deuda actual, comparadas con las de la deuda de los años treinta. En aquella época, buena parte de la deuda del Tercer Mundo tenía la forma de bonos u obligaciones ampliamente repartidos entre tenedores individuales en los países acreedores. En los treinta, cuando un gobierno no podía hacer frente a sus obligaciones se veía orillado a la moratoria, ya que no existía mecanismo alguno que permitiese organizar a los numerosos tenedores de los bonos para negociar una restructuración de los vencimientos. En la actualidad, la deuda está muy concentrada en grandes entidades bancarias de los centros financieros y resulta posible organizar con relativa prontitud las negociaciones. Hoy existen opciones frente a la moratoria que no había en los treinta. La concentración actual de la deuda también entrañaría que, para el sistema financiero internacional, las posibles consecuencias de una suspensión serían mucho más graves. (Este punto se examinará con detalle después.)

Una segunda explicación de la renuencia a suspender los pagos surge de un examen más cuidadoso de las argumentaciones de Kaletsky. Este autor acepta la idea del "interés nacional" y sostiene que la moratoria atiende ese interés en los países deudores. El problema está en que tal interés nacional no existe en las sociedades de clases. Lo determinante para explicar las acciones de un gobierno con respecto a cualquier asunto particular es el interés de la clase o clases dominantes. En lo que respecta a otras maneras de resolver la crisis de la deuda, parecería que *los programas ortodoxos que se aplican en América Latina sirven de hecho a los intereses de los grupos hegemónicos.*

Es cierto que las empresas en América Latina están enfrentándose hoy a considerables dificultades, pero también lo es que las propiedades y los ingresos de las personas ricas no se han visto tan afectados. En su último discurso antes de dejar su cargo a finales de 1982, el presidente de México, José López Portillo, puso el dedo en la llaga al referirse a "empresas pobres con empresarios ricos". Ha sido muy cuantiosa la fuga de capitales, la de México en particular, pero también la de otros países muy endeudados de América Latina, en busca de refugios seguros en las naciones industrializadas, sobre todo en Estados Unidos. Así, los latinoamericanos ricos se han protegido contra la crisis adquiriendo activos en el extranjero. También, en la medida en que los programas de ajuste han devaluado las monedas latinoamericanas, se ha elevado mucho el valor de esos activos en el extranjero, medidos en términos de las monedas nacionales. Los ricos de América Latina no se han desconectado por completo de la suerte de sus empresas en sus propios países, pero sí se han aislado con éxito de los procesos de ajuste, e incluso han logrado ventas gracias a ellos.

Además, es posible que los procesos de ajuste que se realizan en América Latina desempeñen a largo plazo una función positiva para los intereses del capital. En toda la región, los gobiernos están echando atrás costosos programas sociales y abatiendo los salarios casi hasta el suelo. Las organizaciones laborales parecen ineficaces para enfrentarse a tan violenta embestida y probablemente sufrirán una pérdida de fuerza política en el largo plazo. Así, la crisis de la deuda proporciona una racionalización conveniente para que el capital emprenda la ofensiva. Esta manera de enfrentarse a la crisis no garantiza, por supuesto, que haya un ven-

cedor automático. En efecto, intentar de esta manera la creación de una base para el crecimiento puede precipitar a la sociedad en una crisis peor. No obstante, es una concepción que tiene atractivos evidentes para el capital. (Convendría notar las semejanzas de esta política con las acciones agresivas del capital de Estados Unidos en años recientes.)

Una tercera explicación de la renuencia para suspender el pago de la deuda radica en las vastas consecuencias de tal acción. Las moratorias en gran escala pondrían en peligro de colapso al sistema financiero internacional, lo cual dañaría gravemente a todos, lo mismo que a las naciones que hubiesen aplicado esa medida. Está claro que la moratoria, incluso la de un país como México o Brasil, no necesariamente provocaría el derrumbe financiero. El Gobierno de Estados Unidos y los de otras naciones acreedoras disponen de los medios para proveer a los bancos de los fondos necesarios para impedir un colapso en caso de suspenderse los pagos. Sin embargo, tal inyección de fondos dañaría por sí misma a las finanzas internacionales y siempre existe la posibilidad de que las potencias acreedoras no actúen de manera adecuada y suficientemente rápida. Así, la primera línea de defensa contra el desorden financiero internacional consiste en impedir la suspensión de pagos.

Kaletsky no ignora la posibilidad de que ocurra ese desorden; sin embargo, al parecer cree que esas grandes preocupaciones están fuera del alcance de los gobernantes del Tercer Mundo. En su obra analiza las acciones de esos gobernantes desde un estrecho punto de vista economicista que se centra en los costos y beneficios directos y tangibles, y se dejan de lado intereses más importantes. A diferencia de esa posición, quizá entendamos mejor las acciones de los grupos dominantes en América Latina si los consideramos como socios menores del capitalismo internacional. Es cierto que no tienen las mismas responsabilidades globales que sus contrapartes en los centros imperiales, pero sí comparten las cargas (y los beneficios) del poder. Están integrados en el sistema imperial gracias a un bien desarrollado conjunto de vínculos con las empresas internacionales, gracias a un sistema de recompensas mediante la ayuda militar y para el desarrollo, y merced a la presión política directa, todo lo cual les ha enseñado que corresponde bien a sus grandes intereses evitar acciones destructoras.

En lo que se refiere a mantener el sistema, la situación es muy diferente hoy de la que prevalecía en los años treinta. Las características distintas de la deuda de la actualidad, como se dijo, significan que la moratoria de hoy sería probablemente destructiva. Si la suspensión de pagos en los treinta habría sido costosa para los tenedores de los bonos, en la actualidad representaría una amenaza directa para la viabilidad de los bancos principales; y a través de éstos, la moratoria tendría efectos rápidos y perniciosos en la disponibilidad general de liquidez.

Aún más, la relación de los grupos gobernantes de América Latina con el capitalismo internacional es hoy diferente. En los años treinta, el Estado en las naciones latinoamericanas no era una organización capitalista moderna, ya que representaba una alianza de los grupos terratenientes tradicionales, de una élite comercial, de los grupos militares semiautónomos y de una clase industrial capitalista claramente joven y emergente. El Estado latinoamericano era un Estado subordinado dentro del sistema internacional y funcionaba en alianza con el capital extranjero, pero también estaba separado de ese sistema, puesto que representa-

ba los intereses dominantes en una sociedad que aún estaba integrándose al capitalismo mundial. Durante el medio siglo transcurrido desde aquellas moratorias tempranas han ocurrido enormes cambios en la estructura sociopolítica de los estados latinoamericanos y en su relación con el capitalismo internacional. Sobre todo en los países más grandes de la región, notablemente en Brasil, México, Argentina y Venezuela, el Estado se ha vuelto mucho más un Estado capitalista. En consecuencia, junto con este desarrollo nacional del capitalismo en América Latina, se ha establecido, con mayor firmeza y acabamiento, la relación con el capital internacional.

¿Capitalismo o barbarie?

Así, no resulta difícil de entender la renuencia que han mostrado los gobiernos latinoamericanos ante la moratoria. La crisis del endeudamiento está lejos de haberse superado; es posible, por ello, que aún haya suspensiones de pagos. Sin embargo, cabe esperar que los grupos dominantes de América Latina continúen buscando "opciones" que no rebasen el marco en que han actuado: aceptar tanto la deuda como la austeridad que la acompaña. No obstante, aún es necesario explicar por qué siguen los pueblos de América Latina tolerando la situación.

En ninguna parte del continente ha surgido un movimiento que impugne la ortodoxia básica de los programas económicos oficiales. Los sindicatos brasileños y argentinos se han opuesto formalmente a que continúe la austeridad en sus países, aunque su capacidad de traducir esa oposición en hechos no ha sido notable. En la primavera de 1986, por ejemplo, la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó en Argentina a dos huelgas generales. Según el *Latin American Weekly Report* del 4 de abril de ese año, la huelga de marzo fracasó por completo en su intento de cerrar el comercio al menudeo y paralizar el transporte. La huelga de abril se suspendió cuando el Gobierno hizo algunas concesiones mínimas para responder a las demandas laborales. En Brasil, algunos líderes de los trabajadores se expresaron con vehemencia en contra de las acciones oficiales, pero en general el programa del Gobierno parece haber tenido una acogida favorable.¹ Entre los grandes deudores, quizá sea el Gobierno de México el que se ha enfrentado a las impugnaciones de mayor magnitud, pero éstas provienen de la derecha, no de la izquierda. Reflejan las reacciones de los grupos de la clase media y de algunos segmentos de la élite empresarial ante los fracasos del Gobierno. Empero, el programa de la derecha aboga por una menor intervención del Estado en la economía y no impugna los aspectos fundamentales de la austeridad.

Acaso sea poco realista esperar que, en este punto de la crisis, hubiesen ya surgido movimientos populares de protesta en América Latina. Los reveses de la economía no provocan la oposición popular como si se tratase de dejar que el agua fluya cuando se abre la llave. De hecho, cuando menos en ciertas circunstancias, a medida que las cosas empeoran los trabajadores pueden estar menos prestos a protestar. Después de que fracasó la huelga de marzo en Buenos Aires, apareció en el *Latin American Weekly Report* (11 de abril) la explicación que dio a ese hecho un gerente del sector privado: "Éstos han sido tiempos difíciles para los trabajadores; desde que se implantó el austral, sus salarios se han

reducido en 20%, y ahora no quieren perder sus bonos por presentismo [y otros pagos adicionales]."

Para que surja una oposición popular es necesario que el pueblo crea en la existencia de un camino viable, no sólo en cuanto a un programa económico diferente, sino también en cuanto a una fuerza política. Las experiencias de los años recientes en los países que han estado gobernados por regímenes militares hasta hace poco, especialmente Argentina y Brasil, han limitado mucho las concepciones populares sobre otras soluciones de la crisis. En vez de considerar la protesta como una vía conducente a un programa económico progresista, sin duda muchos temen que ella lleve de nuevo a la dictadura militar. Los gobiernos actuales no ignoran estos temores. En respuesta a las amenazas de la CGT de emprender acciones contra el Gobierno argentino, el Ministro del Interior "recordó al público que confrontaciones del tipo planteado por la CGT condujeron, en 1966, a la expulsión del presidente Arturo Illia [por los militares]".² Así, por una parte, la gente ve los regímenes actuales, con sus programas de austeridad, como fruto de un proceso electoral. Por otra, la gente ha sufrido la brutalidad y las dificultades económicas del gobierno militar. La opción parece darse, entonces, entre la austeridad de hoy y la vuelta al régimen militar, es decir, entre el capitalismo y la barbarie.

El vívido recuerdo del gobierno militar no sólo proporciona a las autoridades de hoy un instrumento eficaz para persuadir a la gente de que los programas de austeridad representan lo mejor que se puede tener. Además, los regímenes militares destruyeron o debilitaron mucho los movimientos populares de oposición. Que eso se haya logrado mediante los asesinatos y las desapariciones o simplemente mediante vejámenes y restricciones severas de la actividad política de izquierda no empece el hecho de que los militares tuvieron éxito en impedir que la izquierda sea otra fuerza política viable en la actualidad.

Por supuesto, hay considerables diferencias entre los países que recientemente se han librado del gobierno militar. En México, donde la oposición progresista no es más visible que en Brasil o Argentina, hay un régimen civil relativamente estable, formalmente democrático, que ha estado en el poder durante decenios. No obstante, a pesar de las diferencias, en la mayor parte de América Latina los grupos gobernantes han impedido con éxito que las fuerzas progresistas se constituyan en una opción política viable. Sea que la estrategia empleada haya sido la represión militar brutal o un vasto control burocrático, o una combinación de ambas, lo cierto es que, por lo menos hasta hoy, la izquierda organizada está marginada de hecho.

Esto no debe conducir a la desesperanza. Es sólo el reconocimiento de los límites objetivos a los que se enfrentan las fuerzas de oposición en América Latina. A menudo sobrevienen los cambios con mayor rapidez de la que se pudo imaginar en una época de crisis económica, pero rara vez surgen como la respuesta espontánea a las dificultades económicas de la crisis. Al construir y reconstruir las bases políticas para el cambio es imprescindible reconocer que las circunstancias económicas no generan, por sí mismas, una respuesta progresista. Es posible seguir un camino diferente al de la austeridad, pero para lograrlo es necesario crearlo primero en el ámbito político. □

1. *Latin American Weekly Report*, 14 de marzo de 1986.

2. *Ibid.*